Globethics Repository



Uruguay 1994 [Uruguay 1994]

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see https://www.globethics.net. Data and content policy of Globethics Repository see https://repository.globethics.net/pages/policy.

Item Type	Article
Authors	Mieres, Pablo
Publisher	Fundación Friedrich Ebert (FES)
Rights	Creative Commons Copyright (CC 2.5)
Download date	2026-11-10 17:50:54
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/220025

Nueva Sociedad Nro.133 Septiembre- Octubre 199 4 , pp. 4-12

Uruguay 1994. Un escenario competitivo

Mieres, Pablo

Pablo Mieres: Sociólogo y abogado uruguayo. Investigador del CLAEH, Centro Latinoamericano de Economía Humana, Montevideo; docente en la Universidad de la República y en la Universidad Católica del Uruguay. Especializado en sociología electoral, es autor de varias publicaciones sobre esta temática, entre ellas "Uruguay 1989, un sistema de partidos en transición" y "Desobediencia y lealtad. El voto en el Uruguay de fin de siglo".

El sistema político uruguayo se ha caracterizado en el contexto latinoamericano por la excepcional estabilidad de su funcionamiento democrático y por la continuidad y fortaleza de su sistema de partidos. Excepción hecha de la ruptura autoritaria de 1973 extendida por diez años, Uruguay consolidó su sistema democrático en las tres primeras décadas de este siglo y mantuvo un funcionamiento democrático permanente, con garantías electorales, y basado en el respeto a las reglas de juego de parte de todos los actores políticos. Estas características estuvieron acompañadas de una estructuración bipartidista de larga duración en la que, aunque fraccionalizados, los partidos tradicionales uruguayos han sido siempre auténticos partidos con fronteras firmes que dibujan identidades colectivas bien diferenciadas.

El pluripartidismo

Si bien el Partido Colorado (PC) ocupó la jefatura del Ejecutivo en forma ininterrumpida por más de nueve décadas, no menos cierto es que el Partido Nacional (PN) coparticipó a través de diferentes corrientes internas, casi siempre, en la gestión de gobierno y mantuvo siempre su expectativa de triunfo. En sentido inverso, durante largos períodos importantes fracciones coloradas estuvieron en la oposición a gobiernos encabezados por sectores de su propio partido. De modo que ambas agrupaciones configuraron un sistema de mutua dependencia que sólo es compatible con la caracterización bipartidista. Además, dada su antigüedad y fuerte inserción popular, cumplieron un papel de primer orden en la propia construcción del Estado y el sistema político uruguayos. La caracterización bipartidista se completa con el hecho de que, desde la configuración moderna de nuestro sistema de partidos, ambos han reclutado, en conjunto, alrededor del 90% de los votos.

Esta realidad tuvo un síntoma de transformación en 1958, cuando se produce la primer alternancia en la titularidad del Poder Ejecutivo; triunfa el PN, dotando de

este modo al sistema de partidos de una dinámica más competitiva. Pero el cambio profundo se verificaría a partir de las elecciones de 1971, cuando surge un tercer actor relevante, el Frente Amplio (FA), que obtiene el 18% de los votos y, en particular, en Montevideo supera al PN registrando un 30%. Tales hechos terminaron con el bipartidismo en Montevideo.

El retorno a la democracia, luego de los once años de dictadura, pautó una fuerte restauración del sistema partidario preexistente. En 1984 el PC volvió a ganar, tal como lo había hecho en 1971, mientras que el PN quedó en segundo lugar a nivel nacional y el FA ocupó la tercera posición, aumentando levemente su votación (21,2%). Los resultas en Montevideo reiteraron la distribución de 1971, nuevamente el FA ocupó el segundo lugar y el electorado volvió a distribuirse en tercios. Las tendencias de transformación político-electoral en 1989 cobraron un nuevo impulso, contribuyendo a delinear la imagen de un sistema de partidos en proceso de transformación profunda. En efecto, el primer recambio democrático ratificó la vigencia de la pauta alternante inaugurada en 1958; el PN ganó las elecciones con el 38,9% desplazando del gobierno al PC, que se redujo al 30,3% de los votos. El voto de las alternativas partidarias no tradicionales sumó el 30,2% igualando, por primera vez en la historia, la votación de uno de ambos partidos mayoritarios. Este porcentaje se distribuyó entre el FA, que reiteró su marca de 1984 (21,2%) y un cuarto actor partidario, el Nuevo Espacio (NE), surgido como una escisión del FA, que obtuvo el 9% restante. Tal distribución electoral indica una fisonomía cada vez más pluripartidista; la suma de los votos de los dos partidos tradicionales ya se encuentra muy lejos del acostumbrado 90% del período anterior; en concreto, en 1989 se ubica por debajo del 70%.

El resultado electoral verificado en Montevideo completa el cuadro de transformación electoral; el FA asume el gobierno de la ciudad con un 34% de los votos, quedando los dos partidos tradicionales en porcentajes del 25% cada uno. En 1990 se inauguró la primera experiencia de gobierno por parte de la izquierda, aunque limitada al plano de un gobierno departamental. La evolución político-electoral indica un tránsito del bipartidismo al multipartidismo, con un paralelo crecimiento de las alternativas que se ubican a la izquierda del espectro partidario, tal proceso transcurre en el marco de un sistema democrático estable en fase de consolidación y sin polarización política relevante. En síntesis, el tradicional y estable bipartidismo uruguayo ha entrado en crisis y se perfila una nueva estructuración que admite, al menos, la presencia con posibilidades de triunfo de tres actores partidarios.

Así, por primera vez surge la interrogante sobre quién ganará las elecciones que tendrán lugar en el Uruguay en el presente año. Hasta ahora la incertidumbre se limitaba a las opciones que los partidos tradicionales presentaban, pero en 1994 no puede descartarse el triunfo de una alternativa diferente.

Las elecciones de noviembre

Las próximas elecciones representan el segundo recambio democrático y el tercer sufragio posterior a la etapa autoritaria de los 70, tal coyuntura encuentra al Uruguay en un período de clara afirmación de su funcionamiento democrático. El sistema uruguayo no prevé renovaciones parciales en los mandatos. Por el contrario, se caracteriza por la simultaneidad del cambio, tanto del Poder Ejecutivo como del conjunto del Poder Legislativo y de todas las autoridades a nivel departamental. El veredicto electoral de noviembre asignará las cuotas de poder político a nivel institucional en forma permanente para los siguientes cinco años.

Tal circunstancia influye en las características de la competencia electoral, aumentando su significación y expectativa por cuanto para cualquiera de los actores políticos la reversión de un resultado negativo se verá demorada por un quinquenio. Como se señalara, ambos gobiernos posteriores a la dictadura correspondieron a los dos partidos tradicionales. El primero correspondió a Julio María Sanguinetti, del PC, mientras el actual está presidido por Luis Alberto Lacalle, perteneciente al herrerismo, fracción interna del PN.

La gestión de Lacalle

Con respecto a la gestión saliente, es necesario distinguir por un lado la mecánica y sus dificultades para la construcción de mayorías políticas, y por otro los contenidos impulsados por este gobierno. En las elecciones de noviembre de 1989 el PN obtuvo un 38,9% de los votos y, en particular, la candidatura de Lacalle sólo recogió un 22% del electorado. El régimen electoral uruguayo admite candidaturas presidenciales y legislativas múltiples por cada partido y otorga el triunfo al candidato más votado del partido más votado. La agrupación más votada fue el PN y, entre los candidatos nacionalistas, Lacalle fue quien obtuvo mayor respaldo. Pero, independientemente de ello, el nuevo presidente se enfrentaba a la necesidad de negociar con diversos sectores políticos para constituir un gabinete con mayoría parlamentaria.

La gestión de gobierno comenzó con un acuerdo político bastante amplio que incluyó al conjunto del PN (38,9%) más casi todo el PC (27%), lo que otorgaba una mayoría holgada aunque cualitativamente inestable. De hecho, a poco de iniciada la gestión comienzan a producirse los alejamientos como resultado de diferencias sobre, principalmente, las medidas económicas del gobierno. Al finalizar el tercer año de gobierno el Ejecutivo perdió el apoyo mayoritario y continuó su gestión sin respaldo parlamentario suficiente.

Obviamente, desde el punto de vista de la capacidad para articular mayorías, el balance es claramente negativo. Tal resultado se ve acentuado por la existencia de un conjunto de reglas de juego que no facilita la concreción de acuerdos políticos. A su vez, desde el punto de vista de los contenidos, la administración Lacalle puede analizarse en torno a cuatro grandes temas: 1) las políticas de ajuste y estabilización macroeconómica; 2) la estrategia de inserción internacional del país, en particular con respecto al proceso de integración regional (Mercosur); 3) la reforma del Estado; y 4) la reforma de la seguridad social.

En el primer aspecto, el gobierno actuó orientado por una concepción de corte neoliberal que informaba a las principales figuras de su equipo económico. La traducción de esta concepción económica en planes concretos fue realizada con mucha energía y gran disciplina. La herencia del gobierno anterior obligaba a tomar un conjunto de medidas bastante fuertes desde el punto de vista económico para evitar la hiperinflación. El índice inflacionario anual había trepado a tres dígitos y el déficit fiscal amenazaba con llegar a proporciones de difícil control. Las medidas antinflacionarias impulsadas por el gobierno no pueden calificarse de «shock», pero fueron lo bastante fuertes y, sobre todo, persistentes y estables como para frenar la tendencia a la hiperinflación. Se atacó simultáneamente el gasto público y, ajuste tributario mediante, se expandió la capacidad de generación de recursos del Estado. Simultáneamente se desarrolló una política de contención moderada del salario, con énfasis en el sector público. Ha habido diversas valoraciones sobre el éxito o fracaso de estas medidas, pero lo cierto es que más allá del acierto o no, el balance de este gobierno indica, en este aspecto, una reducción importante de los niveles inflacionarios (se prevé un 35% para 1994) y una sensible reducción del déficit fiscal. Tales indicadores coexisten con un aumento del salario real; más acentuado en el sector privado que en el público.

Esta orientación económica generó costos sociales importantes, por lo que fue duramente combatida por la oposición fue también el motor principal de los sucesivos alejamientos de los «socios» políticos del gobierno. El ajuste implementado se

tradujo en una percepción muy crítica por parte de la opinión pública que, rápidamente, se expresó en las diversas encuestas.

El segundo tema a destacar de la gestión de Lacalle fue el proceso de integración regional. El Mercosur se catalizó en 1990 sin que el Uruguay hubiese decidido previamente su impulso. Debe señalarse que en la campaña de 1989 ningún candidato postuló esta cuestión como una dimensión fundamental de su propuesta de gobierno. Como en tantas otras oportunidades, un país pequeño como este ve alterada sustancialmente su agenda en virtud de las decisiones políticas de sus dos grandes vecinos. Esta diferencia de dimensiones entre Argentina y Brasil por un lado, y Uruguay por el otro, determinaron que el tratado adquiriera una importancia trascendental, afectando casi todas sus definiciones e influyendo en todas las áreas de su economía. El ingreso al Mercosur contó con el respaldo de casi todo el sistema político uruguayo, por lo que la administración Lacalle avanzó en esta dirección sin mayores obstáculos. Tal orientación hacia la integración supuso, por otra parte, una coincidencia al menos parcial con las orientaciones doctrinarias dominantes en el equipo económico, en tanto implicaba una fuerte aceleración de la apertura del mercado, al menos con respecto al contexto regional.

La economía uruguaya experimentó durante este período una gran apertura al exterior, en particular hacia los dos grandes vecinos. Esta situación, sumada a un proceso de atraso cambiario, que ya lleva tres años, supuso una creciente desventaja para los sectores productivos nacionales. Tanto la industria como el sector agropecuario están sufriendo los efectos de una difícil y adversa coyuntura; en la actualidad las actividades de mayor rédito son la importación, la intermediación financiera y la inversión turística. El principal problema que enfrenta la economía uruguaya, derivado de este panorama, es el gran déficit comercial y el cuadro recesivo de los sectores productivos nacionales. De todos modos, las principales líneas directrices de la política económica no van a variar en los próximos meses dado que la estabilidad y la reducción de la inflación forman parte de los principales argumentos electorales del partido de gobierno.

El tercer tema de relieve que definió a la administración Lacalle fue el impulso de la reforma del Estado. Basado en un diagnóstico ampliamente compartido sobre las ineficiencias y el hiperdesarrollo del Estado, el herrerismo impulsó un proceso de reforma estatal, que tuvo sus dos ejes principales en la reducción del número de funcionarios y en la privatización de empresas. También se trabajó en la desburocratización, mediante la supresión o simplificación de trámites en oficinas públicas y la racionalización creciente de las diferentes reparticiones de la administración

estatal. Mientras la reducción de funcionarios y las medidas de desburocratización se canalizaron a través de normas administrativas, la eventual privatización de empresas públicas se tramitó por medio de una iniciativa legislativa. Rápidamente, la discusión política se focalizó en este último tema. El Parlamento aprobó esta iniciativa legal por una mayoría bastante ajustada, en septiembre de 1991. Frente a ello el movimiento sindical y, en particular, el FA iniciaron una campaña para la anulación parcial de dicha ley.

Esta postura fue acompañada paulatinamente por otras fuerzas políticas de la oposición, en particular algunos sectores del propio partido de gobierno, y en la última etapa previa al referéndum también se incorporaron la mayoría del PC y el NE en su conjunto. El referéndum contra la ley de empresas públicas se llevó a cabo en diciembre de 1992 y el veredicto popular determinó un masivo rechazo a esta norma legal, expresado en una mayoría del 73% del electorado. Con ello, el gobierno sufrió una grave derrota y quedó paralizada la reforma del Estado. El tema permanece en la agenda política del país como una asignatura pendiente que sólo podrá ser retomada en el próximo período de gobierno.

Finalmente, la otra reforma que la administración Lacalle pretendió impulsar fue la reforma de la seguridad social. Para el país este tema es crítico puesto que la sociedad uruguaya es una sociedad «envejecida» con una relación poblacional activo-pasivo muy desfavorable y con tendencia a su agravamiento. El régimen de seguridad social vigente determina un déficit financiero creciente que afecta directamente la capacidad económica del Estado, que es quien debe hacerse cargo del mismo. El Ejecutivo presentó un proyecto de reforma de la seguridad social con un énfasis privatizador, rechazado por el Parlamento. De modo que también en este tema el gobierno fue derrotado, quedando seguramente para el próximo gobierno la resolución impostergable de dicha problemática.

En síntesis, las dificultades de gobernabilidad derivadas de la falta de articulaciones de gobierno con respaldo mayoritario se han traducido en una creciente incapacidad de resolver problemas cruciales que atañen a la vida social y política del país.

La crisis de la política

El gobierno culmina su gestión con un resultado, desde su concepción, positivo en materia de estabilidad económica y exhibiendo algunos indicadores sociales que apuntan una recuperación, pero a su vez muestra un balance frustráneo con res-

pecto a las reformas o transformaciones que el herrerismo entendía que debían realizarse de cara al futuro. La crisis o bloqueos que trabaron la gobernabilidad se tradujeron en el impulso, por parte de varios sectores políticos, de un proceso de cambio político que incluía la reforma constitucional y la consagración de una ley de partidos. La primera postulaba la necesidad de mejorar los mecanismos de relación entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo, simultáneamente pretendía modificar la legislación electoral y avanzar en materia de descentralización. La ley de partidos tenía como finalidad propender a un funcionamiento más fluido y ordenado de parte de estos cuerpos políticos. Tanto la reforma de la Constitución como la ley de partidos se frustraron al carecer del respaldo político suficiente para llevarse a cabo. La cercanía de las elecciones dificultó aún más su concreción, por cuanto todos los actores incluían en la valoración de las modificaciones su eventual beneficio electoral inmediato.

A último momento se aprobó una nueva iniciativa de reforma de la Constitución de mucho menor alcance, que permite separar el voto a cargos nacionales y departamentales. Tal propuesta de enmienda será plebiscitada en forma simultánea con las elecciones nacionales del próximo noviembre[1]. Más allá del balance de la gestión del gobierno que, en términos generales y tomando como referencia los sondeos periódicos de opinión pública, arroja un saldo bastante desfavorable, lo cierto es que el sistema político en su conjunto también recoge una evaluación crítica por parte de la ciudadanía, en tanto presenta notorios problemas de productividad y eficacia en la toma de decisiones. Una sociedad que en términos comparados se ha caracterizado por un alto involucramiento ciudadano en la política, hoy presenta sin embargo signos de crisis, escepticismo y desconfianza hacia un sistema que de manera notoria no está funcionando adecuadamente. Tal circunstancia agrega un nuevo motivo de incertidumbre sobre el pronunciamiento electoral, puesto que se traduce en una disminución de la intensidad de los vínculos y las adhesiones partidarias, aumentando simultáneamente el peso del electorado flotante o de menor compromiso previo.

El debate preelectoral

De cara a noviembre de 1994 es necesario presentar la situación de cada una de las fuerzas políticas principales, su situación interna y sus posibilidades electorales.

[1]El Plebiscito tuvo lugar en agosto, con un rechazo abrumador a la reforma constitucional avalada por los partidos políticos (NR).

La polarización del cuarto espacio político.

El Nuevo Espacio, que en 1989 representó al 9% del electorado convirtiéndose en el cuarto actor partidario relevante del sistema, hoy se encuentra en un proceso de grave crisis derivada de su sometimiento a una creciente polarización. En efecto, el NE tenía en 1990 como desafío su consolidación política y el desarrollo de una identidad propia, diferenciada de sus rivales. Sin embargo, a sus fronteras estaban dos actores políticos mucho más fuertes electoralmente que competían por el mismo espacio. El NE nació con la pretensión de expresar a la izquierda renovada con un planteo de transformación, ubicado entre el FA y los dos partidos tradicionales. A partir del período de gobierno inaugurado en 1990, tanto el FA desde la izquierda, como el Foro Batllista, liderado por el ex-presidente Sanguinetti, comienzan a desarrollar discursos políticos que compiten por el mismo territorio de esta nueva coalición. El liderazgo emergente del intendente de Montevideo, Tabaré Vázquez, estuvo acompañado de un discurso moderado, fuertemente renovador con respecto al lenguaje tradicional de la izquierda. La renovación que propugnaba el NE fue asumida por Vázquez desde dentro del propio Frente Amplio, con el agregado de que éste poseía más poder y más respaldo electoral. La reaparición pública de Sanguinetti, con el objetivo de retornar a la Presidencia en 1994, estuvo acompañada con un nuevo discurso de tono claramente socialdemócrata. El acento por lo social, la preocupación por las transformaciones y, fundamentalmente, su crítica al neoliberalismo del gobierno de Lacalle, iban ubicando al ex-presidente colorado cada vez más en el mismo terreno que el NE acababa de ocupar. Jaqueada por las dos fronteras, esta agrupación sólo podía evitar su crisis mediante una decidida estrategia de lanzamiento y confrontación pública. Por el contrario su principal líder, Hugo Batalla, optó por impulsar un acuerdo político-electoral con Sanguinetti, acompañándolo como candidato a la Vicepresidencia.

Por otra parte, el Partido Demócrata Cristiano (PDC), integrante minoritario del NE, y un sector importante del Partido por el Gobierno del Pueblo (PGP), que lideraba Batalla, han optado por negociar la posibilidad de un entendimiento con el FA. No debe descartarse que, si la negociación con el FA fracasara, estos sectores políticos pudieran relanzar este cuarto espacio que, en tales condiciones, tendría una reducida expectativa electoral, reduciéndose aun papel más bien testimonial. En síntesis, esta cuarta opción nacida en 1989 fue objeto de una fuerte polarización que prácticamente la ha hecho desaparecer como alternativa autónoma e independiente. Los beneficiarios directos de este proceso son las dos fuerzas políticas que operaron en las fronteras de estos grupos: el FA y el Foro Batllista.

El retorno de Sanguinetti y su predominio colorado.

Desde 1971 hasta 1989 inclusive el PC había estado dividido básicamente en dos fracciones internas: el pachequismo (liderado por el ex-presidente Jorge Pacheco) y el batllismo (conducido por las figuras de Jorge Batlle y Julio M. Sanguinetti). Estas fracciones se habían alternado en el predominio del partido; en 1971 el pachequismo, en 1984 triunfó con claridad el batllismo, y en 1989 dividieron sus votos en forma muy pareja. Para estas elecciones, el batllismo que sufriera una fuerte ruptura política varios años atrás, ya no se presentará unido. En efecto, Sanguinetti al frente del Foro Batllista y Jorge Batlle liderando el Batllismo Radical se presentan como opciones coloradas diferentes y enfrentadas; mientras tanto, el pachequismo, que ha sufrido escisiones menores, se mantiene como la restante fracción colorada. Ahora bien, la división del batllismo no ha significado su debilitamiento; por el contrario, el Foro Batllista aparece como la fuerza dominante en la interna colorada. Se perfila con mucha fuerza la hegemonía de Sanguinetti; todos los sondeos de opinión pública lo señalan como el candidato que obtiene el respaldo de más de dos tercios de los votantes colorados. Tanto la intención de voto por Jorge Batlle como por Jorge Pacheco se encuentran por debajo del 15% del potencial votante partidario. Este predominio de Sanguinetti entre los colorados se reafirma con su alianza con Hugo Batalla, líder del PGP. Tal circunstancia le permite aumentar su hegemonía dentro del partido y crecer electoralmente hacia afuera. Tomando también como referencia los diversos sondeos de opinión pública, el PC aparece en todos ellos como la primera opción con un porcentaje que oscila entre el 30 y el 35 % de la intención de voto en el país. Todos estos hechos son coincidentes en señalar que Sanguinetti debe ser considerado como uno de los más serios aspirantes al triunfo en noviembre del presente año.

La consolidación del FA, candidatura e incertidumbres acuerdistas.

El FA, que en 1989 obtuviera el 21,2% de los votos, ha desarrollado su primera gestión de gobierno al frente de la intendencia de Montevideo. Es a partir de ese espacio de gestión pública que Tabaré Vázquez ha desarrollado su perfil como líder emergente de la coalición de izquierda. La evaluación de la gestión del Frente en Montevideo, de acuerdo a los sondeos de opinión pública existentes, ha dado saldos favorables y la popularidad de Vázquez es, junto con la de Sanguinetti, de las más altas entre los dirigentes políticos uruguayos. Tales circunstancias, junto a su carisma y notoria capacidad de obtener adhesiones entre la opinión pública no frentista, han determinado que el FA se inclinara en favor de lanzar su candidatura a la Presidencia. Esta posición continúa con la tradición política del Frente de presentar candidaturas únicas para los cargos ejecutivos nacionales y departamentales. Esto no quiere decir que dentro del FA no existan diferentes grupos, partidos o

sectores políticos. En efecto, hoy en día la fuerza frentista principal es el Partido Socialista (PS) - al que pertenece Vázquez - que recoge la intención de voto de alrededor de un tercio de los votantes potenciales de la coalición; un agrupamiento de frentistas independientes liderados por la figura del senador Danilo Astori (candidato a la Vicepresidencia en la elección de 1989) recoge un respaldo cercano a otro tercio; mientras que el tercio restante se distribuye entre las diversas opciones políticas tales como el Partido Comunista, la Vertiente Artiguista, el Movimiento de Participación Popular y otros. Obviamente, esta distribución de preferencias preelectorales no debe suponerse inmodificable; por el contrario, pueden producirse diversos cambios de aquí a noviembre en los respaldos a las fracciones internas. Pero a su vez, el FA parece dispuesto a realizar un acuerdo más amplio que implicaría una negociación con otras fuerzas políticas no frentistas, en la perspectiva de constituir lo que a nivel periodístico se ha denominado un «gran acuerdo progresista». Tal posibilidad, en el momento de escribir estas líneas, no ha terminado de procesarse. Los posibles integrantes de esta nueva coalición serían: el FA, el PDC en alianza con los dirigentes escindidos del PGP que no compartieron la alianza de Hugo Batalla con Sanguinetti, y el Polo Progresista (sector del PN proclive a este acuerdo y dispuesto a retirarse de este partido). La viabilidad de este entendimiento depende de varios factores, pero la cuestión principal pasa por si es posible articular una coalición suficientemente plural cuando el peso electoral de uno de los socios (el FA) es visiblemente superior al del resto de los eventuales integrantes.

Los grupos menores del «gran acuerdo progresista» exigen garantías para no perder su identidad en este proceso de coalición; a su vez el FA exige el reconocimiento de su carácter de actor principal, y debe regular sus tensiones internas puesto que algunos de los sectores que lo integran no ven con buenos ojos este proceso de negociación. Desde el punto de vista del peso electoral, no es posible prever el impacto de la eventual materialización del acuerdo. Puede sí anotarse que, hasta el momento, los sondeos preelectorales ubican al FA en el segundo lugar de las preferencias a nivel nacional con un porcentaje que oscila entre el 25 y el 27% de los votos. La interrogante sobre el efecto que la concreción de esta nueva coalición progresista tendría sobre el electorado es una cuestión crucial, imposible de cuantificar antes de su vigencia. De todos modos, la candidatura frentista de Tabaré Vázquez, aun sin el acuerdo más amplio, debe ser tenida en cuenta como otra de las figuras de primer orden en la pugna presidencial de noviembre.

El pluralismo interno del Partido Nacional .

El PN ha sufrido en estos años el natural desgaste del ejercicio del gobierno; los índices de popularidad del presidente han sido permanentemente bajos y en ocasio-

nes muy bajos, lo que repercutió directamente en los niveles de adhesión al propio partido de gobierno. Las fracciones nacionalistas han mantenido posiciones diversas entre sí. Mientras que el herrerismo ha conducido a través de su líder, el presidente Lacalle, la gestión de gobierno, el Movimiento de Rocha (segunda fracción en importancia electoral) y el Movimiento Renovación y Victoria (liderado por el actual vicepresidente) acompañaron al gobierno hasta hace dos años, distanciándose posteriormente. Finalmente, el Polo Progresista (fracción más pequeña del nacionalismo) se ha mantenido en una postura de oposición al gobierno casi desde el inicio de la actual administración y se encuentra muy cerca de retirarse del PN. De cara a las elecciones de 1994, en el PN se perfilan cuatro candidaturas presidenciales. Por un lado tanto el Mov. de Rocha como Renovación y Victoria, impulsan a sus principales dirigentes como candidatos a la Presidencia. Carlos Julio Pereyra, veterano dirigente nacionalista, será el candidato presidencial del Mov. de Rocha, mientras que Gonzalo Aguirre, actual vicepresidente de la República, será el candidato del Mov. Renovación y Victoria. Por el otro lado el herrerismo, fuerza mayoritaria del nacionalismo, se ha dividido hace menos de un mes y va a presentar dos candidaturas presidenciales. La candidatura de Juan Andrés Ramírez, ministro del Interior del actual gobierno, apoyada por el presidente Lacalle, y la candidatura disidente de Alberto Volonté, que comienza a ganar adhesiones dentro y fuera del herrerismo. Frente a este fraccionamiento de la interna blanca resulta muy incierto el panorama y parece difícil pronosticar cuál de los candidatos será el más votado dentro de este partido. En primera instancia, los datos manejados indican que los dos candidatos herreristas cuentan con mayor chance de ganar entre los blancos. Simultáneamente, pese a que las encuestas han registrado en los últimos dos años al PN como tercera fuerza política, en el último semestre se ha observado un sostenido crecimiento de este partido que, de mantenerse, lo perfila con chance de retener el gobierno. Sus porcentajes han oscilado entre el 17 y el 22%. De modo que, al menos alguno de los candidatos herreristas aparece con chance de terciar en la lucha electoral por la presidencia.

Los temas del debate preelectoral. De acuerdo a lo observado en los primeros discursos públicos, las propuestas programáticas de los principales candidatos en apariencia serán bastante similares con, incluso, grandes superposiciones. El énfasis socialdemócrata de Sanguinetti, que lo perfila hacia el centro o centroizquierda; el discurso de izquierda moderada de Tabaré Vázquez (que en caso de consolidarse la coalición más amplia podría acentuarse), que lo ubica a la búsqueda del electorado de centro; y el planteo de los candidatos herreristas, que muy probablemente expresen un fuerte énfasis social como paso posterior al ajuste económico ya consolidado, permiten imaginar una campaña electoral con baja diferenciación

programática. Por otra parte, más allá de la fuerte oposición que recibió la política de estabilización económica del gobierno, lo cierto es que parece existir consenso a nivel de los equipos técnicos de los diversos partidos en preservar y garantizar la continuidad de la estabilidad macroeconómica. En segundo término, también parece existir consenso sobre la necesidad de impulsar en el próximo período una fuerte apuesta al crecimiento económico en las áreas productivas. La necesidad de una mayor ingerencia estatal en el impulso al crecimiento parece estar en todas las agendas programáticas de los candidatos principales.

Desde esta perspectiva, el objetivo de revertir la recesión en los sectores productivos, modificando también una balanza comercial que ha sido, en los últimos años, muy desfavorable también son referencias comunes en los planes de gobierno. En tercer lugar, y más allá de que este tópico se traduzca luego en realidades efectivas, la preocupación por las políticas sociales y por los desafíos de una distribución más equitativa de bienes y servicios será otro punto de coincidencia en los discursos preelectorales. Es muy probable que las políticas sociales ocupen un lugar de privilegio en las plataformas partidarias de todos los sectores. Las reformas pendientes, tales como las de la seguridad social, del Estado y la política, figurarán entre los contenidos que expondrán los principales candidatos. Las soluciones propuestas para estos temas tampoco serán demasiado diferentes. Por último, el plebiscito constitucional sobre la propuesta de separación entre las elecciones nacionales y las elecciones departamentales será otro tema relevante de definición para los partidos y candidatos. A este respecto, parece muy posible que la gran mayoría de los sectores políticos apoyen la propuesta, que contará con fuerte respaldo popular, sobre todo en el interior del país. Justamente, la posibilidad de que el elector vote con libertad e independencia entre las candidaturas para el gobierno nacional y departamental, puede ameritar la concreción de alianzas nuevas en los ámbitos locales que presenten desafíos inéditos para los partidos políticos. Ante estas circunstancias, factores tales como la imagen y el atractivo que puedan ejercer los propios candidatos; los atributos que sean capaces de transmitir y la propia construcción de la campaña electoral pueden llegar a «hacer la diferencia» en un panorama electoral incierto. La evaluación de las trayectorias anteriores, el grado en que los candidatos logren identificar su figura con la promesa de eficacia y conocimiento del manejo de los asuntos públicos. Pero, sobre todo, la credibilidad que cada uno de ellos sea capaz de inspirar en la ciudadanía pueden ser factores de no poca importancia en esta oportunidad.

A modo de síntesis

Las elecciones nacionales de 1994 en Uruguay aparecen, como nunca antes en la historia política reciente de la democracia, con un alto grado de incertidumbre sobre su resultado final. Es posible indicar que, al menos, cuatro candidatos podrán competir con chance cierta en la carrera por la Presidencia. Datos provenientes de los sondeos de opinión pública indican que la elección se perfila hacia una estructura de tres tercios cuyo resultado es de muy difícil pronóstico. La coincidencia anotada en materia de programas de gobierno, así como el tono y los principales contenidos de los discursos preelectorales indican la notoria preeminencia de las tendencias centrípetas del sistema. Se puede afirmar que los principales candidatos compiten, principalmente, por la captación de la opinión electoral ciudadana de centro. En tales circunstancias, un porcentaje de indecisión que, a seis meses de la elección se ubica entre un 15 y 20%, señala que la captación de este sector será la que decida el resultado final de noviembre.

Más que en otras circunstancias, las decisiones estratégicas de los candidatos y sus equipos asesores en materia de enfoque y definición de campaña, así como la capacidad organizativa de llegar en forma directa al votante serán los factores de mayor incidencia en la obtención del éxito. Alta competitividad y baja predecibilidad en un contexto de relativamente bajo involucramiento ciudadano son las notas más destacadas del escenario electoral de 1994 en el Uruguay.

Montevideo, mayo 1994

Este artículo es copia fiel del publicado en la revista Nueva Sociedad Nº 133, Septiembre- Octubre de 1994, ISSN: 0251-3552, **<www.nuso.org>.**